

Cayara, un simple acto de venganza

Murieron 28 campesinos

DE LIMA: La matanza de 28 campesinos a mediados de mayo en el pueblo de Cayara, ubicado a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Ayacucho, aún es comentada en los círculos políticos de todas las tendencias en este país andino.

Fernandina Palomino Quispe, una de las siete testigos que hasta el momento han declarado ante el fiscal de Ayacucho, Carlos Escobar Pineda, manifestó que la mañana del 13 de mayo el grueso del pueblo bajó a trabajar a los sembrados, distantes a una hora a pie de Cayara. Como es costumbre en la sierra, mujeres y niños presenciaron la cosecha, y alrededor de las nueve de la mañana vieron llegar helicópteros, camiones con soldados y caballería montada.

Una de las testigos dijo que vio cuando separaron a las mujeres de los varones y ahí los golpearon e insultaron. Los acostaron bocabajo, cortaron cactus espinosos y se los pusieron sobre las espaldas desnudas, los golpearon y luego los asesinaron con machetes, hachas, cuchillos y segaderas. Eran sus propias herramientas de trabajo. Según los testigos, los militares no atendieron las súplicas de las mujeres ni los llantos de los niños.

También murieron cinco campesinos que se encontraban en la iglesia desarmando un altar. Allí, adentro, los cortaron con vidrios y los ahorcaron con sogas. Esto, sumado al incendio de tres casas y el saqueo de víveres, fue el resultado de una posible represalia.

Cayara tiene una triste historia. En 1981 llegó Sendero Luminoso (SL) al pueblo, como a otros de la zona, ordenando a los comuneros que cooperaran con víveres y confeccionaran ropa para la lucha armada. Aquellos que se opusieron hoy están muertos. En 1983, la base militar de Huaya intentó organizar a la población en "rondas de autodefensa", contra las columnas armadas de SL, pero el miedo pudo más y los cayarinos se negaron a organizarse, puesto que el ejército no estaba dispuesto a armar al campesinado. Entonces, cada vez que se producía alguna acción senderista en las cercanías, el ejército rebuscaba en Cayara hasta la última vivienda.

Según diversas versiones, una columna armada de 20 senderistas llegó el 13 de

Alejandro Balaquer



Pricilia García, una de las testigos

mayo a Cayara, obligando a un grupo de campesinos a acompañarlos en la emboscada de tres camiones del ejército que se dirigían a la base de Colca, cercana al pueblo. Esa tarde, el capitán José Arbulú Sime y cuatro soldados de su pelotón murieron al hacer explosión 100 metros de minas colocadas en el camino por SL.

"Aquí los muertos tienen jerarquías —comenta el antropólogo Jaime Urrutia, teniente alcalde del Concejo de Ayacucho—, si muere un soldado al día siguiente mueren dos campesinos, pero si muere un capitán al día siguiente mueren 80 campesinos. Cayara es un simple acto de venganza por la muerte de un capitán".

Desde enero de 1983, la principal causa de preocupación para Amnistía Internacional en Perú ha sido la desaparición forzosa de miles de personas y las ejecuciones sumarias y extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas en las zonas administradas por comandos "político-militares" al amparo de estados de emergencia, como el caso de Ayacucho.

Se han denunciado más de tres mil desaparecidos documentados y otros tres mil indocumentados, solamente en el

departamento de Ayacucho, producidos en los programas contrainsurgentes, creados para combatir a SL. La organización guerrillera, denominada Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso", ha combatido desde la clandestinidad contra sucesivos gobiernos peruanos, mediante campañas de asaltos, colocación de bombas, asesinatos masivos y selectivos, en muchas partes del país desde 1981.

Según el alcalde de Ayacucho, Darío Azparrent, la subversión se genera en su departamento por diversos factores socioeconómicos. "Es que en mi tierra la desocupación alcanza a más del 50 por ciento de la población económicamente activa de esta zona. También la explotación y sobreexplotación del pueblo, el caos y la corrupción de la administración pública y privada, son excelentes caldos de cultivo".

Si en 1980 la población ayacuchana contaba con 70 mil pobladores, hoy día cuenta con 120 mil, creando un cinturón de miseria alrededor de la ciudad.

Movido por las alarmantes declaraciones de las sobrevivientes, Carlos Escobar Pineda, fiscal superior comisionado para la investigación de desaparecidos de Ayacucho, partió el 20 de mayo rumbo a Cayara. Acompañado por tres testigos presenciales y dos peritos médicos, se dirigió hacia el poblado con el fin de hacer las investigaciones sobre los trágicos sucesos.

Paralelamente viajó una comisión parlamentaria, formada por cinco diputados y un senador de partidos de oposición. "Nosotros íbamos a levantar los cadáveres, que según un comunicado oficial habían sido el saldo de un enfrentamiento entre el ejército y SL —declaró el fiscal Carlos Escobar—. Cuando llegamos no había un solo cadáver".

Dos días después de la matanza, cuando los sucesos no se habían hecho públicos aún, sorprendentemente el 16 de mayo jura en pleno un nuevo gabinete ministerial, tras la renuncia del anterior. El nuevo primer ministro, Armando Villanueva, considerado como la mano dura del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), anuncia en su primer discurso que el gobierno combatirá sin vacilar al terrorismo.

Hay testigos que aseguran haber visto personal militar trasladar en acémilas los cuerpos cubiertos por frazadas, en las noches del 23, 24 y 25 de mayo, hacia la base militar de Huaya.

Mientras se espera un largo futuro de investigaciones, el primer ministro Villanueva dio a conocer la modificación de la ley contra el terrorismo, por calificarla de demasiado "blanda". (Verónica Sáenz Porras).